

Asociación por una Tasa a las Transacciones financieras para Ayuda al Ciudadano

EL GRANO DE ARENA

AÑO XIX Informativo semanal



INFO XIX.987 8 de octubre de 2018

informativo@attac.org http://attac-info.blogspot.com

La guerra y la paz

Mundo

EL G20 Y SU AGENDA DESTRUCTIVA. En noviembre de 2018, el grupo de los 19 países considerados los más desarrollados y emergentes del mundo más la Unión Europea se reunirán en la Argentina para discutir temas decidir qué medidas regirán el funcionamiento del mundo bajo un contexto de crisis global.

IMPERIOS COMBATIENTES. LA INSÓLITA COALICIÓN. Cuatro de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU se alían para torear a Trump

Latinoamérica

LA GUERRA Y LA PAZ EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Si se considera a la paz como una situación de no beligerancia abierta entre estados, puede afirmarse efectivamente que no hay guerras en la región desde 1995, en ocasión del conflicto fronterizo que desembocó en la Guerra del Cenepa entre Ecuador y Perú.

DESMANTELA ARGENTINA EL CONOCIMIENTO ESTRATÉGICO Y LAS EMPRESAS ESTATALES DE TECNOLOGÍA (NUCLEAR, ESPACIAL, AGRARIA, INDUSTRIAL) Desde que la alianza neoliberal Cambiemos asumió el gobierno argentino en diciembre del 2015 se produjeron drásticos recortes presupuestarios en todas las áreas relacionadas con la Ciencia y la Tecnología (CyT), con el consiguiente desmantelamiento de las empresas estatales de tecnología nuclear, espacial, agraria, industrial, entre otras, sustituyendo el conocimiento estratégico soberano por contratos con empresas estadounidenses e israelíes.

****

Mundo

EL G20 Y SU AGENDA DESTRUCTIVA

Virginia Bolten

En noviembre de 2018, el grupo de los 19 países considerados los más desarrollados y emergentes del mundo más la Unión Europea se reunirán en la Argentina para discutir temas decidir qué medidas regirán el funcionamiento del mundo bajo un contexto de crisis global.

Lo que debería ser motivo de celebración, sin embargo, es un elemento de preocupación entre los movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos. La atención está puesta en la forma que los temas abordados por el Grupo de los 20

son tratados y también cuáles de ellos quedaron afuera de la mesa de debates.

El mundo pasa por una crisis importante que tienen por lo menos cinco puntos muy relevantes en el siglo XXI: la desconstrucción del Estado regulador, la fiebre del oro negro, la esclavitud moderna, el proceso de recolonización de territorios y la guerra contra los inmigrantes. Estos puntos son o ignorados o tratados en la agenda del G20 como secundarios.

Los tres ejes centrales del G20 para este año son: el futuro del trabajo, la infraestructura para el desarrollo y la seguridad alimentaria. La posible salida para las problemáticas del desempleo, del maldesarrollo y del hambre es la misma lógica del crecimiento infinito utilizando recursos finitos y no renovables. Para lograr el objetivo de tal crecimiento es necesario aplicar medidas que precarizan las relaciones de trabajo, que permitan el libre comercio de bienes y servicios, y que profundicen la desigualdad.

Nada distinto se puede esperar de países que pretenden discutir el futuro del trabajo, en los cuales los derechos de las personas trabajadoras son sistemáticamente violados. Según un informe de la Confederación Sindical internacional (CSI), en China, India, Corea, Turquía, Indonesia, Arabia Saudita y México, las personas trabajadoras no tienen sus derechos laborales garantizados y muchas sufren violencia y represión. En Brasil, Reino Unido y Estados Unidos las personas trabajadoras son impedidas de sindicalizarse y no son pocos los casos de personas que trabajan bajo condiciones análogas a las de la esclavitud. Todos estos países son integrantes del G20.

El Grupo de los 20 apuesta en la uberización del trabajo. Es decir, el trabajo en plataformas digitales que hace de la persona trabajadora una emprendedora y que también tiene como consecuencia la flexibilización del empleo. Según el investigador francés André Lamarche, este proceso de uberización tiene un fuerte componente de desregulación neoliberal que busca reformar el poder del mercado. La consecuencia de la implementación de esta lógica de trabajo es precarización, destruición de los derechos laborales y desamparo social. Asimismo crea una autoexplotación y una subjetivación individual meritocrática.

La infraestructura para el desarrollo –planteada por el G20 como fundamental para atraer inversiones– busca avanzar sobre los territorios e implementar rutas eficientes que permitan la mejor circulación de bienes y mercancías. Sin embrago, no se habla de las consecuencias que estos megaproyectos tienen en la vida de campesinos/as y pueblos originarios, como también el impacto ambiental producido.

Estos megaproyectos como los de Colombia – que pretenden conectar los océanos Pacífico y Atlántico a través de un canal seco–, tienen un impacto directo en las culturas y en el territorio de negros e indígenas de la región; pasan por encima de la población, que no es consultada sobre la construcción de estos proyectos. El abogado y profesor de Derecho Ambiental, Juan Pablo Vismara afirma que el costo ambiental de los megaproyectos de ingeniería es una preocupación real en todos los lugares donde se desarrollan y, con la modernización de la cadena productiva, este es un tema aún más importante.

El planteamiento del G20 sobre la seguridad alimentaria es preocupante. Decir que el problema del hambre es la insuficiente producción de alimentos, sin problematizar el modelo productivo dominante y la distribución, es solamente una forma de seguir con

la profundización de la desigualdad en un mundo que produce alimentos suficientes para alimentar a 12 mil millones de personas.

La decisión de no tratar el cambio climático como un eje central del debate es un nítido alineamiento de la reunión del G20 a los intereses de las grandes corporaciones petroleras. Sobre este tema, el abogado de Derechos Humanos y Soberanía Alimentaria, Marcos Filardi señala que "comemos petróleo". Filardi remarca que los intereses de las compañías petroleras en este sistema agroindustrial descansan en el petróleo, desde el fertilizante sintético, la mecanización agrícola a base de combustibles fósiles y el packaging; asimismo agrega que no producimos alimentos, sino que el objetivo de la producción es el mercado internacional de *commodities*.

Al observar los objetivos de la agenda del G20, es nítido que no hay una preocupación en buscar alternativas que puedan realmente terminar con la crisis. En este sentido el G20 es parte del problema, no la solución. La probabilidad de que la crisis se profundice aún más si estas medidas se concretaren es enorme. Sin dudas es un paquete suicida impuesto por un sistema en el cual garantizar las ganancias está por encima de garantizar la vida misma en el planeta.

Referencias:

https://www.pagina12.com.ar/92007-el-trabajador-uberizado

https://www.facebook.com/notes/huerquen-comunicaci%C3%B3n-en-colectivo/medio-ambiente-y-derechos-humanos-derechos-en-disputa/1847399251949676/

http://www.economis.com.ar/marcos-filardi-alimentos-agronegocios-soberania-alimentaria-campesinos-monocultivo-soja-tierra/
Fuente: http://virginiabolten.com.ar/politica-argentina/el-g20-y-su-agenda-destructiva/

IMPERIOS COMBATIENTES. LA INSÓLITA COALICIÓN

Rafael Poch

> Cuatro de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU se alían para torear a Trump

El lunes 24 de septiembre pasó algo curioso en Nueva York: cuatro de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU se reunieron con la comisaria europea de Exteriores, Federica Mogherini, y el ministro de Exteriores de Irán, Javad Zarif, para torear a Donald Trump. El asunto era el acuerdo con Irán.

El gobierno iraní está cumpliendo ese acuerdo firmado por todos ellos en 2015. Eso lo reconoce hasta Theresa May. Sin embargo, Estados Unidos, animado por Israel y los miembros más demenciales de su belicista administración, se ha retirado para regresar a la que ha sido su política desde que la revolución iraní derrocara al sha: el cambio de régimen. A quienes pretendan respetar lo firmado y hacer tratos con Teherán, Trump les promete sanciones a través de su control de los canales bancarios y comerciales del que su país es dueño. Los ministros de Exteriores de Francia, Reino Unido, Rusia y China, más la comisaria europea y el ministro iraní, se han rebelado contra Trump, declarando la vigencia del acuerdo: los más viejos del lugar no recuerdan nada semejante.

“Los participantes subrayan su determinación de proteger la libertad de sus operadores económicos para realizar legítimos negocios con Irán”, señala la declaración. Y su punto octavo abre a Irán el Banco Europeo de Inversiones como canal para sus negocios comerciales con el mundo. Se pondrá en marcha “un mecanismo especial para facilitar los pagos relacionados con las exportaciones de Irán, incluido el petróleo, y las importaciones, lo que ayudará y tranquilizará a los operadores económicos que realicen negocios legítimos con Irán”. Mogherini aclaró que este sistema podría abrirse a otros países fuera de la UE, y ha subrayado que todos los firmantes actuales del pacto atómico lo apoyan.

Después de que Trump manifestara ante la Asamblea General de la ONU que “los dirigentes iraníes siembran el caos, la muerte y la destrucción” en el mundo, y glosara sus sanciones (que desde abril han hecho perder más de dos tercios de su valor a la moneda local y que el 5 de noviembre aún se reforzarán más) como medio para defenderse de las “sangrientas intenciones de Teherán”, la declaración de los cuatro + dos sonó potente. En el caso de la Unión Europa casi como una verdadera declaración de independencia. ¿Verdaderamente?

Desde que Trump se fue del acuerdo y anunció sanciones para las empresas que negocien con Irán, las mayores empresas europeas con expectativas allá se han ido en estampida; PSA, Total, Renault, VW, Daimler, y diversos bancos europeos. No parece que el anuncio del lunes vaya a cambiar eso, porque los negocios de esas empresas con Estados Unidos pesan mucho más que lo que puedan ganar en Irán. Solo las pequeñas empresas sin negocios con Estados Unidos podrán correr el riesgo. Aún así, mientras los europeos no dispongan de su propio *Swift*, es decir de un sistema independiente de transacciones financieras fuera del alcance del dólar y de los bancos americanos, como ha mencionado el ministro alemán de exteriores, Heiko Maas, el desafío será pólvora mojada. Otra cosa sería si los gobiernos europeos de la UE fueran capaces de proteger de forma efectiva a sus empresas del abuso que representa la extraterritorialidad de las leyes de Estados Unidos.

Pero incluso sin eso, la insólita coalición del lunes sienta un pequeño precedente. Lo que hoy no existe y convierte a esas declaraciones en algo parecido a papel mojado, puede existir mañana. Ninguna moneda ha dominado la economía mundial eternamente y el dólar no será excepción. Es más, el intento de Trump de chantajear a los demás con su moneda y su control de las redes comerciales internacionales puede volverse contra él. Y en eso estamos.

P.S. El 22 de septiembre Irán sufrió el más mortífero atentado de su última década: 25 muertos, la mitad de ellos civiles incluido un niño de cuatro años, en un ataque a un desfile militar en la ciudad de Ahvaz. Se conmemoraba el inicio de la guerra con Irak, una guerra de ocho años (1980-1988) propiciada por occidente en respuesta a la revolución de 1979 y que dejó la factura de un millón de muertos en Irán. La magnitud del atentado equivale a los vistos en París, Londres o Barcelona. El Estado islámico lo reivindicó. Pero, en vísperas de la llegada del Presidente iraní, Hasán Rohaní, a las Naciones Unidas (donde pronunció un discurso lleno de buen sentido), no se podía permitir que un atentado presentara como víctima al Irán al que se hace pasar como principal factor de terrorismo en el mundo. Así que se optó por titulares que difuminaran lo sucedido: “Los guardias revolucionarios, objetivo en un desfile militar en Ahvaz”, y similares. La compasión es selectiva.

Fuente: https://ctxt.es/es/20180926/Politica/21926/Rafael-Poch-ONU-Consejo-de-seguridad-Trump-Iran-Hasan-Rohani.htm

Latinoamérica

LA GUERRA Y LA PAZ EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Javier Tolcachier

Si se considera a la paz como una situación de no beligerancia abierta entre estados, puede afirmarse efectivamente que no hay guerras en la región desde 1995, en ocasión del conflicto fronterizo que desembocó en la Guerra del Cenepa entre Ecuador y Perú.

Como resulta obvio, esta visión escolar de guerra interestatal es por completo parcial, anticuada e inadecuada. Las estadísticas[1] mundiales indican que la mayoría de conflictos armados en curso involucran actores no estatales o violencia unilateral – ya sea por parte del Estado o con la participación de un alto número de factores irregulares, habitualmente en complicidad con instancias locales y extranjeras.

Las guerras actuales en América Latina y el Caribe

Los principales conflictos armados en la región se desarrollan en México, Colombia y Brasil, aunque la vulneración del derecho humano a la integridad física se verifica en casi todo el territorio con muy altos índices de violencia homicida en Centroamérica y Venezuela.

Si bien en apariencia intraestatales, estos conflictos violentos conectan con fenómenos transnacionales, alcanzando niveles intolerables debido a la respuesta militarizada y a la colusión entre instituciones del Estado (gobiernos, policía, judiciario) y redes delictuales.

Colombia exhibe además la particularidad de encontrarse ante la posibilidad de cesar una guerra de cinco décadas entre el Estado y formaciones guerrilleras, que no ha sido otra cosa que la institucionalización de uno de los motivos centrales que originaron dicho alzamiento: la elevadísima concentración latifundista. Dicha concentración propietaria de la tierra no ha sufrido modificaciones y es causante de otra arista mortal de la misma guerra, la formación de milicias privadas y grupos paramilitares para reprimir y expulsar campesinos de sus territorios. Esta modalidad feudal se extiende también a Brasil, Paraguay y otros puntos.

La expansión del agronegocio, la minería legal o ilegal y la construcción de megaproyectos de infraestructura motivan el asesinato selectivo y la amenaza, constituyendo una forma de guerra contra líderes sociales, defensores del medio ambiente y poblaciones locales.

A estas situaciones bélicas se agregan la militarización de áreas indígenas, justificadas con leyes antiterroristas –como por ejemplo en el territorio mapuche– y el asedio constante a gran parte de los asentamientos periurbanos en toda la región, cuyo exponente lamentablemente destacado son las favelas en Río de Janeiro.

Otro componente de violencia física sistemática es el feminicidio, cuya tasa en América Latina y el Caribe es la más alta en el mundo, según Naciones Unidas. Acorde a un relevamiento de la CEPAL (2016), un promedio de doce mujeres es asesinado diariamente, registrándose la mayor proporción en países como Honduras, El Salvador, República Dominicana y Guatemala, aunque también con un número elevado de casos en Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia y Perú.

Pero no puede reducirse el escenario de la guerra en América Latina tan sólo a la violencia física. Hay guerras económicas como las que EEUU practica contra Cuba y Venezuela, guerras sociales de las corporaciones y oligarquías que dejan a las mayorías populares en la miseria y la segregación, guerras judiciales y mediáticas para proscribir referentes y organizaciones políticas progresistas y de izquierda, guerras de apropiación de recursos naturales que dejan tras de sí una enorme destrucción medioambiental.

Acaso una de las pocas victorias de la paz en la región haya sido el destierro efectivo del armamento nuclear, vigente desde la entrada en vigor del Pacto de Tlatelolco.

En definitiva, considerar a América Latina y el Caribe como una Zona de Paz, como ha sido consignado en la II Cumbre de la CELAC en La Habana, es un alto principio a defender, pero sobre todo, un gran objetivo a lograr.

Alimento de guerra

¿Puede empeorar la situación? Sí. Hay una multiplicidad de factores que son habituales acompañantes –incluso generadores– del desastre bélico. Bien vale verificar su presencia o ausencia.

Fractura geopolítica: en los momentos de inestabilidad mundial en que se producen declives de potencias hegemónicas con el concomitante ascenso de otras, suelen producirse conflictos armados. El tablero mundial de predominio occidental con eje en EEUU y Europa está siendo velozmente desequilibrado por fuerzas emergentes y alianzas, entre las que predominan China, Rusia o India, por sólo citar los principales emergentes.

En esta reconfiguración planetaria la unidad latinoamericano-caribeña se constituiría en un bloque con poder propio, desarticulando una de las principales áreas de influencia de la potencia en declive. Por ello la integración regional es objetivo de destrucción para el eje occidental en decadencia. A ello se suma la crecida influencia de China en la región, en términos comerciales, de inversión y de proyectos de infraestructura estratégicos, lo cual amenaza desplazar la centenaria dominancia estadounidense y europea sobre la región.

Expansión imperialista: La agresión bélica ha sido una consigna prácticamente fundacional de los Estados Unidos de Norteamérica. La expansión de sus fronteras hacia el Oeste, la anexión de más de la mitad del territorio mexicano, la guerra contra España con la apropiación de Cuba y Puerto Rico y la posterior sucesión ininterrumpida de invasiones, golpes, instalación de dictaduras y guerras contrarrevolucionarias continúa en la misma línea con las conspiraciones actuales contra gobiernos y sectores políticos insumisos a sus propósitos colonialistas.

Dichas actuaciones son estimuladas por la acumulación de “halcones” en el gabinete de Trump y en las cámaras del legislativo, interviniendo en América Latina y el Caribe con una recrudecida intromisión militar, construcción de nuevas bases, maniobras conjuntas, entrenamiento a oficiales, cooptación de fuerzas de seguridad, financiamiento de organizaciones no gubernamentales y una ofensiva diplomática controlada desde Washington.

Armamentismo: Según el instituto SIPRI, el gasto en armamentos en la región se ha incrementado en un 77% en el período 2000-2017. Otras fuentes[2] destacan un aumento aún mayor en los presupuestos militares de países como Guyana (x10!) Panamá (x7!), Ecuador, Paraguay (x4!) Brasil, Colombia (x3!), la duplicación de partidas en Perú y un incremento cercano al 50% en Chile, México y Argentina. A lo que se agrega la presión armamentista desde el Norte. La ley impulsada por Trump prevé incrementar en 82 mil millones el gasto militar estadounidense el año próximo, llevándolo a 716.000 millones de dólares.[3] Este escenario deja poco espacio para hablar de distensión.

Recursos naturales: Las zonas de principal producción de minerales se encuentran mayormente en las economías del “Sur-desarrollo” mientras que su mayor consumo se encuentra en países desarrollados. Esta desigual distribución, sumada al hecho de que compañías transnacionales del Norte global tienden a apropiarse de la extracción y agregación de valor como recurso económico propio, es fuente primaria de conflictos bélicos. Otro tanto vale, en términos estratégicos, para los escasos recursos acuíferos, esenciales para el consumo humano, la producción agrícola y energética. Mientras los recursos renovables de agua decrecerán en todo el mundo, su demanda aumentará por crecimiento poblacional y necesidades de desarrollo. En términos globales, América Latina y el Caribe contienen grandes reservas de estos recursos, lo cual, desde el mismo inicio de la conquista colonial, colocaron a la región en el rol de zona de despojo, papel tristemente aún vigente.[4]

Rol militar: La influencia del sector militar se ha acrecentado, incluso con un aumento de su presencia política pública, siendo hoy decisiva tanto en los países gobernados por la izquierda como por la derecha.

Superioridad tecnológica: La lucha por la preeminencia tecnológica está en el vórtice de la competencia de poder global. Esta guerra se desarrolla primariamente entre compañías asentadas en los centros económicos de mayor volumen con el auxilio de sus respectivos

gobiernos y universidades, pero es una guerra mundial por la apropiación de conocimiento, consumidores y datos. Latinoamérica y el Caribe cumplen la función subsidiaria de mercados cautivos, cuya independencia tecnológica no es tolerada. Lo mismo vale para el desarrollo de infraestructuras y su gestión soberana como factor estratégico de desarrollo económico.

Mano de obra desocupada: Un alto número de desocupados ha sido siempre materia prima esencial para la conformación de ejércitos, cuerpos represivos, formaciones mercenarias o bandas delictivas. La sociedad recluye allí a los "desadaptados" de un orden excluyente. El componente de jóvenes entre 15 y 24 años –ciento diez millones o 17% del total poblacional de América Latina y el Caribe[5]– sumado al alto índice de desocupación juvenil, cercano al 20% (23% en sectores urbanos), reproducen la marginación y por tanto, aumentan el riesgo de su "inclusión" en bandos violentos.[6]

Enfrentamiento religioso o cultural: Aunque existe una pugna entre el catolicismo y el avance de las iglesias pentecostales (o evangélicas) y entre éstas y cultos de origen africano, sumado a un creciente reclamo social por un estado laico despojado de preferencias religiosas, no pareciera que esto pueda desembocar en enfrentamientos armados.

Por otra parte, la violencia psicológica y racial subyacente a la imposición histórica de una mentalidad eurocéntrica (con el agregado de connotaciones estadounidenses) no determina pero aguza los distintos conflictos existentes. A la par, la propaganda cultural proveniente de EEUU abona el terreno de la guerra idealizando la actitud guerrerista, falsificando justificaciones de supremacía y difundiendo valores y procedimientos gangsteriles que arraigan en los segmentos postergados.

Conflicto fronterizo: A divergencias territoriales no resueltas, (por ejemplo, entre Venezuela y Guyana por el Esequibo o entre Chile y Bolivia por su salida al mar) se agrega hoy el aumento de la migración transfronteriza. La violencia crece debido a la represión y a la discriminación de los migrantes promovida por los medios de comunicación.

Exclusión política: Cuando el sistema injusto cierra todas las válvulas de genuina participación política proscribiendo liderazgos populares o haciendo inviables transformaciones por vía democrática, aparece en el horizonte la posibilidad de sublevaciones violentas. Aunque tal situación de persecución, inhibición y difamación se verifica claramente en la actualidad, pareciera que movimientos y poblaciones tienden a tomar la lucha no violenta como una salida más eficaz.

Secuela de guerra anterior: Toda guerra deja huellas profundas de destrucción, exilio, venganza, temor y nueva exclusión, alimentando condiciones para el resurgimiento de la violencia. Es el caso de Colombia, que exhibe el más alto número de desplazados internos del mundo y en el que su nuevo gobierno –débil y en manos del poder conservador– no exhibe signos de querer tomar el camino de la reparación, la reconciliación y la redistribución de riquezas imprescindibles a la resolución del conflicto.

Esto último, sumado al vasallaje geopolítico, su reciente asociación a la OTAN, sus elevados índices de desigualdad y exclusión social, su posición de ser país líder de cultivo de coca y producción de cocaína, la apretada conjunción de poder y delito, la inserción estadounidense en su aparato militar, su permeabilidad fronteriza con Venezuela y animadversión contra la Revolución Bolivariana, hacen de Colombia el factor principal de riesgo para un nuevo estallido bélico en la región.

A este cuadro poco alentador debe agregarse la paralización de instancias de concertación intrarregionales como UNASUR o CELAC y la paralela actitud beligerante de la OEA, en tanto brazo continental de la diplomacia estadounidense.

Atenuantes y alternativas

La situación no es auspiciosa. Sin embargo, hay diversas variables que es necesario considerar que atenúan la inminente posibilidad de una guerra intervencionista abierta contra Venezuela.

Si bien los gobiernos del "Grupo de Lima" han mantenido un férreo alineamiento con las directivas diplomáticas de EEUU contra Venezuela, incluso los más sumisos se han mostrado –al menos

por ahora y pese a las insistentes giras de altos funcionarios norteamericanos– renuentes a implicarse decididamente en una intervención militar directa, seguramente por comprender que cargarían con la mayor responsabilidad operativa y enfrentarían fuertes presiones internas.

La debilidad interna de gobiernos impopulares como el de Temer, Macri y Vizcarra, a la que se suma la transición en México hacia un gobierno que seguramente regresará a la tradición diplomática de concertación multilateral, es un factor que limita las posibilidades de una aventura militar.

Por otro lado, en EEUU habrá próximamente una elección de medio término, en la que Trump no tiene fácil revalidar mayorías legislativas. Un involucramiento directo en una guerra tan cercana –y al contrario que en administraciones anteriores, con muchos medios en contra– sería contraproducente en un sector amplio del electorado.

Además de todo ello, ¿cuál serían las reacciones rusa y china? ¿Mantendría Europa su retórica agresiva en caso de ataques? ¿Cómo reaccionarían las demás naciones latinoamericanas y del Caribe? ¿Cómo se traducirían las solidaridades de otras naciones del mundo contra una agresión a gran escala? Demasiadas incógnitas que no permiten una lectura lineal.

Más allá de todo eso, el principal anticuerpo a la guerra proviene del pueblo llano. Hay un fuerte acumulado en la conciencia popular de América Latina y el Caribe que defiende la paz como bien supremo. Hay un aprendizaje histórico de mucho dolor y sufrimiento que abona esta comprensión.

Pionero en este sentido es justamente el pueblo colombiano, pero también se ha puesto claramente de manifiesto en el masivo rechazo popular a la violencia en Venezuela y Nicaragua, en la denuncia de todo intento negacionista de la memoria en Chile y Argentina, en la firme decisión del pueblo mexicano de acabar con la destrucción. Incluso en los EEUU, en donde los adolescentes han construido un masivo movimiento para condenar las matanzas en escuelas y universidades y la libre portación de armas.

Es previsible que ante cualquier asomo de nueva incidencia bélica en la región, esta conciencia de paz aflore y se fortalezca traspasando toda frontera. La clave de la resistencia a lo que pareciera ser inevitable, es que esta conciencia crezca y se vuelva inexpugnable. La alternativa a eso, es el desastre.

Javier Tolcachier es investigador del Centro Mundial de Estudios Humanistas, comunicador en agencia internacional de noticias Pressenza, escritor y productor radial.

Artículo publicado en la Revista *América Latina en Movimiento* No. 535: Paz y NoViolencia: Rebeldía a un sistema violento, coedición con Pressenza.

DESMANTELA ARGENTINA EL CONOCIMIENTO ESTRATÉGICO Y LAS EMPRESAS ESTATALES DE TECNOLOGÍA (NUCLEAR, ESPACIAL, AGRARIA, INDUSTRIAL)

Observatorio CyT-CLAE

Desde que la alianza neoliberal Cambiemos asumió el gobierno argentino en diciembre del 2015 se produjeron drásticos recortes presupuestarios en todas las áreas relacionadas con la Ciencia y la Tecnología (CyT), con el consiguiente desmantelamiento de las empresas estatales de tecnología nuclear, espacial, agraria, industrial, entre otras, sustituyendo el conocimiento estratégico soberano por contratos con empresas estadounidenses e israelíes.

Dos ideas justifican esos recortes. La primera afirma que no se puede gastar más de lo que se recauda (déficit fiscal), y la segunda es el reclamo de la eficiencia (salarios muy altos, investigaciones innecesarias, etc.).

En el eje de la eficiencia se encuadran todas las políticas de reducción de presupuestos, algunos presupuestos directos, otros a través de Ministerios u otras dependencias del Estado. Dentro de

las empresas estatales de tecnología o dependientes del Estado más afectadas podemos encontrar a *INVAP S.E. (Investigación Aplicada, Sociedad del Estado),* dedicada al diseño y construcción de plantas, equipamientos y dispositivos en áreas de alta complejidad como energía nuclear, tecnología espacial, tecnología industrial y equipamiento médico y científico.

También a ARSAT (Argentina Satelital), brinda servicios de telecomunicaciones a través de infraestructuras terrestres, aéreas y espaciales; YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), Aerolíneas Argentinas; Planta de Agua Pesada de Arroyito, que sirve a la moderación y refrigeración de reactores; NASA (Nucleoeléctrica Argentina), operadora de las centrales nucleares del país y el *Astillero Río Santiago*, uno de los más grandes de la región, cuyos trabajadores fueron duramente reprimidos y criminalizados.

La lista continúa. Podríamos sumar las instituciones con dependencia más directa del Estado: la *Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agraria (INTA)*, *e incluso la Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicet))*, y el conjunto de las 56 Universidades Nacionales.

El ajuste económico sólo ha servido para subordinar y despotenciar todas las áreas que plantean o trabajan en pos de un país con soberanía tecnológica.

Un ejemplo claro se da en el marco del Plan Nuclear Argentino, donde se tomó la decisión política de cancelar la construcción de la cuarta central nuclear de tecnología Candú de uranio natural que contaba con un 70% de desarrollo local y embarcarse en un contrato “llave en mano” con China para la instalación en 2022 de la quinta central nuclear de uranio enriquecido, tecnología no dominada aún por Argentina. (1)

Otro ejemplo concreto del ajuste, es la situación que atraviesa la *CONAE*, que ahora pasó a depender del Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuando antes lo era directamente de la Presidencia nacional, por lo que en la actualidad tiene menos márgenes de maniobra y con un presupuesto aún más acotado por el paso de ministerio a secretaría de Estado de dicha área.

A todo ello, se suma un impase del Plan Satelital, dado que en 2016 ya empezaba a caminar la construcción del satélite *ARSAT-3*. El plan original proyectaba la construcción de ocho satélites. Los dos últimos en desarrollarse deberían lanzarse para reemplazar a *ARSAT 1 y 2*al final de su vida útil. Además se canceló el plan de la Televisión Digital Abierta, que llevaba la posibilidad de acceso a la información y recreación a todo el país, utilizando los dos satélites de construcción nacional que ya se encuentran en órbita.

En este marco, se presenta una delicada situación para la empresa INVAP, que no está exenta de estos recortes y del nuevo direccionamiento de la política de gobierno. Ya desde el 2015 la empresa esperaba respuestas claras respecto a los proyectos que tendrían continuidad y aquellos que dejarían de ser prioridad.

En julio de este año, con la visita del presidente Mauricio Macri a Bariloche, se abrió un nuevo capítulo de esta situación. Lo que venía siendo una incertidumbre pasó a ser realidad.

El presidente expresó: “*Los contratos que tenía la Nación en INVAP eran de la época de la magia y la plata no está*"(2). El diario Clarín, entre otros, publicó oportunamente que habría una cancelación masiva de contratos de la empresa estatal dispuesto por el Ejecutivo Nacional del orden de 1.000 millones de dólares.

El 25 de julio, esta empresa de relevancia internacional comunicó oficialmente su situación. Entre otros conceptos y números, señaló: “*cuenta con un saldo de ejecución de contratos confirmados*

*de más de 800 millones de dólares, de los cuales dos tercios corresponden a contratos de exportación. Algunos de los contratos firmados con el Estado Nacional se encuentran en estado de revisión, pero esta situación no afecta al bac*klog (trabajos confirmados pendientes de ejecución)" (2).

Un compromiso oficial entre el ejecutivo nacional, *INVAP*, y el gobierno de la provincia de Río Negro, propietaria de la empresa, acordó el adelanto de lo adeudado por el Estado a la empresa y los 15 contratos que "siguen" en ejecución por 300 millones de dólares, blanqueando un recorte de más de 500 millones al conjunto de proyectos que la empresa tenía en investigación y desarrollo para el Estado argentino y para el país.

Muchos proyectos que generan condiciones de soberanía tecnológica han sido abiertamente cancelados. Algunos de esos son:

- TRONADOR II, es un lanzador para poner en órbita satélites propios, y cuya capacidad de construcción se adquirió gracias a los desarrollos de los satélites de telecomunicaciones ARSAT-1 y ARSAT-2. Durante la gestión del Ministerio de Planificación, CONAE formuló el desarrollo íntegramente nacional y las pruebas de lanzamiento de 3 a 6 prototipos experimentales para el perfeccionamiento del vehículo Tronador II, a los efectos de concluir el modelo tecnológico para que a partir de 2016 pudieran efectuarse los primeros lanzamientos con satélites de observación de la Tierra de hasta 250 kilogramos.

Pero desde la asunción de Macri, este proyecto fue privado de presupuesto. Cabe mencionar que se encontraba trabajando una importante dotación de empleados de INVAP en él, dedicándose al diseño y la construcción de la plataforma de lanzamiento del cohete. (3)

- SARE, microsatélites de hasta 250 kilogramos para la observación de la Tierra. Se preveía que el Tronador II los pusiera en órbita. Los lanzamientos se habían planificado efectuarlos desde la base Puerto Belgrano en Bahía Blanca. La ingeniería, construcción e integración estaba a cargo de INVAP. A pesar de los muchos trabajadores involucrados de la empresa estatal, el macrismo le retiró el presupuesto. (3)

- ARSAT-3, el tercero de la serie, y cuya construcción debía comenzar en 2016, fue discontinuado por el régimen neoliberal al privárselo de presupuesto. Fue una poda de 250 millones de dólares. INVAP ya había destinado una cantidad considerable de trabajadores en esta iniciativa. (3)

- SARA (Sistema Aéreo Robótico Argentino), creado en noviembre de 2010 por el Ministerio de Defensa, con la misión de dotarse de aeronaves no tripuladas para la defensa y control del espacio aéreo. Se encomendó entonces a INVAP la responsabilidad del diseño y la gestión del SARA, así como también la integración del sistema completo, la definición de los ensayos de validación y verificación, procesos en los cuales intervienen empresas nacionales de tecnología -principalmente PyMEs organizadas en una red de más de 40 subcontratistas-, encargadas de la fabricación de componentes y la provisión de subsistemas.

El proyecto, que asignó a la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA) la fabricación de las aeronaves, incluía avanzar con otros modelos de complejidad creciente que permitieran arribar a un primer prototipo operativo. El SARA fue cancelado e INVAP sustituida por una empresa de tecnología israelí. Lo mismo sucedió con FADEA. (3)

Disputa por el dominio del conocimiento y la técnica

En estos casi tres años de gobierno de la *Alianza Cambiemos* se ha visto un progresivo desmantelamiento de todos los sectores productivos del país. Dentro de estos, las áreas científico-tecnológicas, siempre vinculadas a la promoción del Estado, no fueron la excepción.

Por el desmantelamiento no solo se ven afectadas las grandes empresas de desarrollo tecnológico, como es el caso de INVAP, sino que, indirectamente, muchas PyMES que realizaban trabajos para esas mismas empresas están viendo un horizonte de quiebra o cierre. En INVAP todavía no ha iniciado la ola de despidos masivos, pero la mayoría de las empresas satélites, que generan mano de obra, dejaron de recibir trabajos de esta sociedad del Estado.

La misma situación se ha generado en todas las ramas tecnológicas debido a la apertura de las importaciones a productos de origen extranjeros, pero principalmente por la falta de trabajo genuino. Asimismo se observa una apertura a la industria y productos de Israel y Estados Unidos imponiendo sus tecnologías, presentando un claro acuerdo de cooperación entre Argentina y esos dos países.

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional profundiza este camino y seguramente presentará una nueva etapa de conflicto, tanto para *INVAP S.E* como para el sector tecnológico en general, donde aparecerá de manera ociosa mano de obra muy calificada.

Cualquier país que realmente apueste a un desarrollo de tecnologías soberanas debe invertir en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I), ya que si no estas industrias no se desarrollan ni se potencian. Eso es así en Argentina, en la región y en el mal denominado “primer mundo”; y si no observemos quiénes y cuánto invierten en función de su PBI (4).

En un mundo globalizado, donde la disputa principal es el conocimiento estratégico, perder el manejo de este tipo de tecnología y desarrollo tecnológicos, presenta una realidad en la cual cada vez Argentina será más dependientes. Mientras, los cambios reales en las sociedades están en la disputa por el conocimiento y el dominio de la técnica.

Notas:
(1) https://www.infobae.com/politica/2018/07/23/argentina-y-china-cerraron-un-acuerdo-para-la-construccion-de-una-central-nuclear-para-el-2022/
(2) https://www.bariloche2000.com/noticias/leer/macri-anticipo-mas-recortes-pero-prometio-no-tocar-la-obra-publica-en-bariloche/115239
(3) http://www.oetec.org/nota.php?id=3361&area=8
(4) https://es.unesco.org/node/275037
** Observatorio de Ciencia y Tecnología*, asociado al *Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico*(CLAE-FILA).

****

RTF: http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfoXIX/98.doc
PDF:<http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo XIX/98.pdf
SUSCRIPCIÓN Y DES-SUSCRIPCIÓN A “El Grano de Arena” o CAMBIO DE MAIL:
http://list.attac.org/wws/subscribe/attac-informativo
Para obtener un número anterior entrar en
http://list.attac.org/wws/arc/attac-informativo
Distribución: Tom Roberts

Edición: *Susana Merino* - Co fundadora de ATTAC Argentina